



Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Sentencia Definitiva

Expediente N°: 57428/2022

AUTOS: "AGROPECUARIA SAN MIGUEL SRL c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA"

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los , reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos, se procede a votar en el siguiente orden:

### EL DOCTOR JUAN ALBERTO FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Se presenta en autos Agropecuaria San Miguel SRL y apela la Resolución N° 2022-1213-E-AFIP-DEIMPR#DGTLSS, que hizo lugar parcialmente al recurso de revisión interpuesto contra la Resolución N° 252/2016 (DV RRME) dictada en fecha 1 de septiembre de 2016, OI N° 1.239.413, dejando sin efecto la deuda y multa allí determinadas en relación con el trabajador Boerr Gustavo, y confirmando el resto de los cargos, una deuda por la suma de \$ 641.643,80 (capital), \$ 2.692.832,86 (intereses) y \$ 1.283.287,60 en concepto de multa por los períodos 12/2003 al 11/2014.

La parte actora recurrente, en primer término, solicita la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 bis del decreto-ley 1285/58, en cuanto impone como requisito de admisibilidad el depósito del importado resultante de la resolución impugnada. Considere que el hecho de tener que pagar para poder acceder a una revisión del acto administrativo cuestionado, resulta incompatible con los derechos y garantías constitucionales de la propiedad. En apoyo de su postura cita jurisprudencia. Además, solicite la declaración de nulidad del procedimiento al entender que se le cercenó su derecho de defensa, juicio previo y debido proceso. Para concluir, resalta que la relación que unió a Agropecuaria San Miguel SRL con la cooperativa Fru Pack Ltda. es un contrato de Servicios Cooperativos y que es ésta última quien tiene un vínculo asociativo con los trabajadores involucrados. Asevera que Agropecuaria San Miguel no tenía facultades de dirección, ni disciplinarias, como así tampoco imponía el cumplimiento de horarios ni mucho menos



abonaba sueldos ni aportes. La recurrente acompaña como prueba de sus dichos un contrato de explotación conjunta suscrito con la cooperativa de trabajo de transportistas de Tierra del Fuego, solicitud de ingreso a la cooperativa firmada por Don Campos, constancia de autorización para funcionar, copia de una ordenanza municipal, copia de adhesión al monotributo y una copia del acta acuerdo relativa a la entrada en vigencia de la ordenanza n° 2986/2005.

I.- En primer término, cabe destacar que la parte impugnante no ha realizado pago de depósito previo alguno, a los efectos de habilitar la instancia. Ahora bien, no es ocioso destacar en este punto que, mediante el art. 44 de la ley 27.742 se incorpora a la ley 19.549 (de procedimiento administrativo) el art. 25 bis el cual reza lo siguiente: "Cuando en virtud de norma expresa la impugnación judicial del acto administrativo deba hacerse por vía de recurso, el plazo para deducirlo será de treinta (30) días hábiles desde la notificación de la resolución definitiva que agote la instancia administrativa. Quedan derogadas todas las prescripciones normativas especiales que establezcan plazos menores. En ningún caso el órgano administrativo ante quien se interponga el recurso judicial podrá denegar su procedencia, debe limitarse a elevarlo al tribunal competente salvo que se hubiera fijado un plazo menor, el plazo para la elevación del expediente será de cinco (5) días. Si no se cumpliera este plazo, el interesado podrá ocurrir directamente ante el tribunal judicial cuando el acto administrativo recurra hubiere impuesto una sanción pecuniaria su cumplimiento no podrá ser exigido como requisito de admisibilidad del recurso judicial.

Es decir que a partir de la sanción de la ley 27.742 (conocida como "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos), ha tenido lugar un cambio de paradigma en la materia, morigerando los requisitos para el inicio de la acción judicial frente a los actos de la autoridad estatal que contienen sanciones pecuniarias. Con lo cual, corresponde su aplicación -normas procesales vigentes- al momento de resolver y aún si tenemos en cuenta que una tesis contraria podría más importar una denegación de acceso a la justicia por una rigurosa interpretación que conlleva la aplicación mecánica de un requisito procesal (Ver en este sentido CSJN "Sánchez Carlos c/ Banco). Avellaneda SA s/nulidad de decisiones e





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

### Sentencia Definitiva

intervención” Enviado, del. 2/2/89). Asimismo, cabe señalar que el Más Alto Tribunal de la Nación ha sostenido reiteradamente desde antaño que las normas de naturaleza procesal son de aplicación inmediata (Fallos: 215:470; 212:12; 220:30; entre otros).

Es por ello que, toda vez que esta reciente disposición legislativa se encuentra plenamente vigente al momento del dictado de la presente sentencia, corresponde señalar que en el caso de marras, no resulta exigible el pago del depósito previo para el acceso a esta instancia en lo que respeta a las sanciones pecuniarias aplicadas por la autoridad estatal.

Ahora bien, cabe destacar que nos encontramos frente a la impugnación de un acto administrativo complejo, híbrido o mixto, que contiene determinación de deuda y una sanción como consecuencia de la falta de cumplimiento oportuno de aquella, lo cual a mi entender, no debería llevarnos a una aplicación parcial o sesgada del art. 25 bis de la ley 19.549.

Por lo tanto, se impone a mi parecer una interpretación de favorabilidad integra respecto a la sustanciación de la acción. En honor al principio in dubio pro actione, entiendo que en el particular se encuentra habilitada la instancia (cfme. Fallo: 335:1885). Lo contrario podría implicar un desmembramiento interpretativo de la resolución que acarrearía un resultado obstaculizante del ejercicio de la garantía constitucional de acceso a la justicia consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional y el consecuente desconocimiento del principio in dubio pro actione, antes invocado. En un sentido similar se ha pronunciado recientemente esta sala en autos " TRANSOL SRL c/AFIP S/Impugnación de deuda, Enviado def. De fecha 30/04/2025.

Adentrándonos al fondo de la cuestión planteada, cabe recordar que el tema cooperativo y su tratamiento desde el punto de vista laboral y previsional ha sido objeto de numerosos estudios y análisis, tendiente a precisar, el vínculo real que pueda existir bajo esta modalidad asociativa. Es la ley 20.337 la que en su art. 2º determina que las cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios.

En las sociedades cooperativas se utiliza el trabajo de los socios. Son administradas por aquellos sobre la base de la igualdad de derechos y



obligaciones, el trabajo sólo puede ser prestado por los asociados, los beneficios son el resultado de una empresa en común que se reparten en forma proporcional, todos los participantes con un solo voto en la asamblea general, y normalmente no pueden tener empleados ajenos, salvo en situaciones extraordinarias (cfr. Gloria M. Pasten de Ishihara, "Las cooperativas de trabajo y la responsabilidad laboral", pub. en Doctrina Laboral, abril 1994, pág. 287).

De allí entonces que en caso de enfrentarnos a una genuina sociedad cooperativa, en cuyo funcionamiento no hubiese mediado fraude o irregularidad que justifique la imposición de multas, es decir, que es la cooperativa la que realmente realiza la actividad, el vínculo del prestamista con el tercero ha de ser cuidadosamente analizado a efectos de no desnaturalizar la finalidad que se persigue con este tipo de asociaciones.

En el caso bajo estudio, con base en el relevamiento efectuado por la inspección, se formuló cargo respecto de diversas personas que -según el organismo- serían dependientes directos de la recurrente -no obstante que varios de ellos refirieron ser socios de una cooperativa. La circunstancia relativa a la pretensa relación de dependencia la misma es negada por la empresa sancionada y que además se agravia por no haberse tenido en cuenta que la relación laboral fue con la referida cooperativa, quien, cabe resaltarlo, no fuera parte en el procedimiento de determinación de deuda.

El art. 40 de la ley 25.877, al referirse a las cooperativas de trabajo, parte de una premisa indiscutida y es que siempre nos encontraríamos en presencia de una simulación o fraude, o por lo menos de serias presunciones a este respecto. Ello así, la autorización de contralor que acuerda la norma, no conlleva necesariamente a dar por cerrada esa circunstancia sin escuchar a todas las partes involucradas, y sin agotar todos los medios probatorios a su alcance para arribar a tal conclusión. Por lo tanto, será pura y exclusivamente una cuestión de hecho y prueba demostrar que los asociados cooperativos son trabajadores de quienes contratan con la cooperativa, convirtiéndose en realidad en "socios" o "partícipes necesarios" de un fraude a las leyes laborales y previsionales; supuesto de extrema gravedad que requiere de parte de quien efectúa tal imputación, el máximo de prudencia y actividad probatoria.





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

### Sentencia Definitiva

La declaración que los supuestos trabajadores brindaron por ante la inspección ha de ser considerada únicamente como un punto de partida de una mayor investigación. El grado de certeza respecto a la configuración de la presunción legal ante el “indicio” que resulta del procedimiento administrativo dependerá del cúmulo de pruebas que se obtenga, mediante la labor investigativa de la administración, sin perjuicio de las que la propia imputada pueda suministrar para la mejor defensa de su derecho.

Es por ello que las declaraciones de los Sres. ALBORNOZ Maximiliano Gastón (38217326), ZARATE Luis Antonio (34875730), CUALLE Pedro Alejandro (23972558), MARIOLY Moreno (95021705), RAMOS Walter Ramón (35918698), FIGUEROA Gabriela (38757676), CALLIZAIA Roger (31657408), GALUZO Emilio Héctor (26908983), COPA Sergio (38186716), RIZZO MORALES Aldo Federico (33275580), GODOY Nicolás (8343068), BOERR Gustavo (22760918), SAIQUITA Vicente (92658519) -entre otros- quienes afirmaron ser socios cooperativos, ameritaba mínimamente citar a comparecer a la cooperativa al proceso administrativo a fin de poder lograr un análisis panóptico del vínculo asociativo alegado por la impugnante.

Debemos recordar la génesis de las cooperativas de trabajo en cuanto se originan cuando un grupo de trabajadores toman conciencia de sus necesidades, problemas e intereses comunes comienza a organizarse buscando la forma más adecuada de resolverlos. La Alianza Cooperativa Internacional (ACI), 1995, estableció que la cooperativa “es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente gestionada”. Es decir, son empresas centradas en las personas, que pertenecen a sus miembros, quienes las controlan y dirigen. Las cooperativas asocian a las personas de manera voluntaria, democrática e igualitaria, y se gestionan con la regla de “un miembro, un voto”. (Ver Aspectos-Básicos-Cooperativos -INAES, <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/aspectos-basicos-cooperativos-inaes.pdf>)

Lo señalado demarca la hipersensibilidad que presenta en la actualidad esta temática y todo lo relativo al concepto de "relación de dependencia", que



si bien diversos autores se han encargado de delinear con una precisión casi quirúrgica, llevados a la práctica frente a casos concretos estas definiciones empiezan a desdibujarse ante las dudas que generan sus notas tipificantes y la superposición que por momentos se advierte con otras figuras como las del contrato de obras y servicios (Ver art. 1251 y sig. C.C.C.N.) que torna cada vez más delgada esa línea fronteriza demarcada por la presencia o no de "subordinación o dependencia" que hacen operativas las normas protectoras del derecho del trabajo (Ver. Mi voto en autos "REMADEX S.A. C/MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL S/IMPGUNACINO DE DEUDA" Causa n° 30.036/2023 Sent. Del de fecha 21/11/23).

Con relación a ello, no podemos dejar de señalar el voto del Dr. Lorenzzetti en autos " Cairone, Mirta Griselda y otros c/ Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires - Hospital Italiano s/ despíd" (Fallos:338:53) donde en el considerando 9° de su voto señala "... Que la sentencia califica como jurídicamente subordinada una relación que no es dependiente en ese sentido, confundiéndola con el control de la prestación. El control existe en una serie de contratos de colaboración, porque quien no puede hacer algo por sí mismo, lo delega en otro y lo controla. En los vínculos de colaboración autónomas hay una intromisión o injerencia del titular del interés sobre quien realiza la colaboración y está destinada a precisar el objeto del encargo..."

Por todo ello, entiendo que la presunción solo debe ser el punto de partida de un procedimiento de investigación exhaustiva, donde todas las pruebas necesarias para su comprobación se lleven a cabo. Resulta oportuno poner de manifiesto que existiendo hechos y pruebas insuficientes, el fisco no debía limitarse a los datos vertidos en el acta, sino que, por el contrario, en virtud del principio inquisitivo o de oficialidad, la autoridad administrativa debía dirigir el procedimiento y ordenar que se practicasen todas las diligencias que resultaran conducentes para el esclarecimiento de la verdad y la justa resolución de la cuestión planteada, como pudo ser –entre otras- la tendientes a constatar la veracidad y términos en que las tareas eran efectivamente desempeñadas por los trabajadores. durante los periodos en cuestión.





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

### Sentencia Definitiva

Aunque el procedimiento puede ser iniciado de oficio o a instancia de parte, el impulso corresponde a la administración, en razón de que no se tiende a satisfacer simplemente un interés individual, sino un interés público: el administrativo (ver Hutchinson, Tomás; " Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549 ", pág. 29 y ss.).

Con lo cual, al no haber el organismo arbitrado medios indispensables que tenía a su alcance, tendientes a corroborar la veracidad de los hechos invocados por la recurrente, mal puede ahora sustentar la liquidación de deuda en concepto de aportes y contribuciones y la multa dispuesta, toda vez que el procedimiento está encaballado en un cúmulo de presunciones sin base cierta alguna.

Las normas constitucionales, y en particular aquellas que establecen los derechos de los individuos frente al Estado, previstas en la primera parte dogmática o valorativa de la C.N, son imperativas; es decir, existen y deben ser aplicadas, precisamente porque integran un orden jurídico constitucional superior al Estado. En palabras de German Bidart Campos el "Derecho Constitucional de la libertad" goza de fuerza normativa.

No se trata de cumplir con un ritualismo procesal, sino de satisfacer el orden público para arribar a la verdad material, mediante el aseguramiento del derecho de defensa del administrado. En tal sentido se expidió esta Sala –en su anterior integración- en autos “INGENIO RÍO GRANDE SA c/ DGI” enviado. 81407 del 31.10.00 en cuanto sostuvo que “...El proceso administrativo debe brindar protección jurídica al particular a la par que asegurar la pronta y eficaz satisfacción del interés general.

El procedimiento administrativo debe ser transparente, en el que se asegure el pleno y cabal conocimiento del interesado de la gestión que se lleva a cabo, permitiéndole argumentar, producir y controlar todas las medidas de prueba que proponga y hagan a su derecho, como así también las que la propia administración impulsa en su búsqueda de la verdad. Con ello, no sólo se garantiza el derecho de defensa del individuo, sino una mayor racionalización y eficacia de los trámites administrativos, facilitando a los funcionarios que deben expedirse una información más amplia y completa. Posteriormente, compete al organismo administrativo apreciar las ventajas



producidas, no ya en base a principios rígidos, sino de manera lógica y natural, aquilatando cada una de ellas en su individualidad y dentro del conjunto de la rendida.

Por ello, el organismo no puede basarse solo en la inspección efectuada sin importar otros elementos para determinar la deuda, debió haber ahondado aún más en materia probatoria para sostener o desvirtuar las inconsistencias detectadas.

La formulación de estos procesos lógicos, aceptados y regulados (ver Ley 26.063 título II) necesariamente deben ajustarse a un criterio de razonabilidad respetando el debido proceso adjetivo y garantía de defensa en juicio, debiendo de este modo agotarse todos los medios para poder arribar en forma precisa la materia imponible.

En este orden de ideas el más alto Tribunal de la Nación tiene dicho que "... La sola invocación de la prestación de servicios para terceros no parece constituir argumento válido ni suficiente para desacreditar a la cooperativa como tal y menos aún para sostener el presunto fraude a la ley, encubriendo una relación laboral, si no ha sido debidamente fundado en el material normativo y fáctico del caso..." (Ver Disidencia de los Dres. Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz en Fallos: 340:1414).

Con lo cual, el hecho de estructurar el procedimiento únicamente en base a las presunciones señaladas, aparece cuanto menos dogmático frente a la complejidad de la materia a analizar y la imperiosa necesidad de contar con mayores elementos de juicio. La utilización de estas presunciones no debe ser entendida como la instauración del principio de la responsabilidad objetiva, sino como un régimen probatorio característico de la figura tributaria (en similar sentido ver Fallos: 312:149). Por lo tanto, ante la ausencia de pruebas conducentes, en lo que hace a la comprobación de las presunciones que sustentan el reclamo, se impone descalificar el procedimiento administrativo previo llevado a cabo en relación a los presentes accionados.

Por lo expuesto, propicio se declara la nulidad del procedimiento incoado y de las resoluciones dictadas en su consecuencia, deberá la Administración tomar nueva intervención a fin de producir toda la prueba necesaria con el objeto de dilucidar plenamente la situación laboral y/o social







Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

### Sentencia Definitiva

de las personas físicas como así también la de las personas jurídicas involucradas en la presente causa.

A mayor abundamiento, ante el nuevo escenario legislativo que se configura a partir de la actual redacción del art. 23 de la ley 20.744 (t.o. por art. 89 de la "Ley Bases" y el art. 3 del anexo II del Decreto 847/2024 reglamentario de la Ley 27.742), cabe preguntarnos en que lugar quedan situadas tales presunciones y con que fuerza (conf. art 4 de la ley 26.063 y art. 1 de la RG AFIP 2927/2010).

Respecto a los demás agravios considero abstracto expedirme al respecto, en virtud en la forma en la que se propone resolver.

En cuanto a las costas, dadas las particularidades del caso y la forma en la que se resuelve, corresponden imponerlas por su orden (art. 68 2do párrafo CPCCN).

Por las consideraciones vertidas precedentemente, propicio: 1) Revocar la resolución recurrida y ordenar al organismo a que lleve a cabo nuevamente un procedimiento respetando el debido proceso adjetivo en base a los argumentos esgrimidos precedentemente, 2) Imponer las costas en el orden causado (conf. art. 68 2do párrafo del CPCCN.), 3) Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

### **EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:**

En el caso a estudio el vocal preopinante, Dr. Fantini Albarenque, propicia se proceda a la apertura de la instancia recursiva judicial y declara la nulidad del proceso incoado contra AGROPECUARIA SAN MIGUEL SRL con miras a determinar si se configuró o no una situación fraudulenta, pues la tesis administrativa es que, mediante la interposición de un tercero -cooperativa de trabajo Fru Pac Ltda- se habrían enmascarado verdaderas relaciones de trabajo que deberían haber cotizado al sistema previsional como dependientes, y no como socios cooperativos como sostiene la impugnante.

En líneas generales coincido con la propuesta de mi distinguido colega, pero la situación traída a conocimiento del Tribunal presenta complejas aristas por lo que entiendo necesario efectuar una serie de precisiones,



especialmente por haberse operado en nuestro ordenamiento jurídico una novación sustancial a partir del dictado de las leyes 27.742 y 27.743, que podría incidir en el resultado de pleitos en trámite en los que se discute la posibilidad de fraude a las leyes previsionales.

Desde el punto de vista formal, coincido en que resulta conveniente la apertura de la instancia de revisión judicial ya que, en situaciones dudosas y donde se invoca imposibilidad económica de cumplir con el depósito previo de la deuda reclamada, se justifica una intervención activa del Poder Judicial de la Nación a fin de salvaguardar las garantías reconocidas a las personas por imperio de lo dispuesto por los arts. 17, 18, y 109 de la nuestra Carta Magna, máxime cuando el legislador admite la revisión de las multas patrimoniales a fin de evitar todo abuso estatal dentro de un contexto económico complejo en que se conjugan fenómenos tan delicados como la necesidad de combatir la evasión previsional con la de adecuar la economía a una nueva realidad tratando de atraer capitales a fin de facilitar el crecimiento económico para lo cual se torna imperioso alcanzar seguridad jurídica.

Ahora bien, en nuestro ámbito corresponde al Poder Judicial resolver, con fuerza de verdad legal, todo conflicto entre particulares o los de aquellos con el Estado y, si bien los tiempos modernos se caracterizan por la aparición de organismos administrativos con potestades jurisdiccionales, no puede ni debe prescindirse de una posibilidad amplia de revisión para evitar todo abuso y que las personas se vean materialmente perjudicadas ante el accionar de un Poder Administrativo que muchas veces tiende a imponer mandatos imperativos en lugar de resolver situaciones controversiales suscitadas entre las partes.

Si bien es cierto que el nuevo artículo 25 bis de la ley 19.549, incorporado en virtud de lo dispuesto por el art. 44 de la ley 27742 establece en forma taxativa que, cuando el acto administrativo recurrido hubiere impuesto una sanción pecuniaria su cumplimiento no podrá ser exigido como requisito de admisibilidad del recurso judicial, no son pocas las ocasiones en que lo reclamado no es solo el pago que responde a una sanción económica, sino que también comprende montos por deudas impagas o abonadas en menos, más los intereses correspondientes.





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

### Sentencia Definitiva

En estos casos entiendo configurada una situación inescindible, por lo que en este aspecto debo coincidir con mi colega de Sala, dado que deviene de toda lógica aplicar un criterio amplio en lo que respecta a la exigencia de cumplimiento del depósito previo, pues la multa impuesta no es otra cosa que el resultado de la inobservancia, por parte del empleador, de alguno de los deberes que la norma legal le impone atento su carácter de tal (conf. art. 12 ley 24241).

Entrando al fondo de la cuestión controvertida, las cooperativas de producción o trabajo son asociaciones de personas que se unen para producir bienes o prestar servicios y cuyo objetivo es mejorar sus condiciones económicas, sociales y culturales pero organizándose democráticamente en asambleas de sus miembros, para elegir autoridades y lograr una distribución equitativa de los beneficios económicos que puedan generarse a través de la actividad personal de estos.

Se caracterizan por proteger la autogestión y la conducción democrática de la asociación siendo su finalidad proporcionar trabajo a sus asociados, los que reciben una parte de los excedentes que genera la cooperativa siempre en proporción a la labor realizada por cada uno. Su finalidad es, obviamente, económica como la de cualquier otra asociación productiva –sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, etc.- pero, desde el punto de vista práctico, al estar formada por trabajadores y trabajadoras, también pretenden elevar sus condiciones de vida, constituyendo una respuesta frente al sistema de producción donde el trabajador no participa del rédito de la explotación lo cual sucede o debería suceder en las cooperativas de trabajo.

La idea que mueve a dichas entidades es reemplazar la figura del trabajador asalariado por el socio cooperativista, dueño del capital y del trabajo, y a la empresa autocrática y vertical, por una organización horizontal, igualitaria y solidaria. Se ha expresado que las citadas asociaciones buscan evitar la ilegítima explotación del trabajo manual o intelectual del hombre. Su objetivo político no es favorecer sino suprimir, en la medida de lo posible, el trabajo asalariado, para sustituirlo por el trabajo en común, mediante una aportación libre y solidaria del trabajo de todos –técnicos, empleados y obreros- que contribuyen de tal manera a la obtención de beneficios puros en



los que participan exclusivamente los que conjugan sus aptitudes y realizaciones, volcándolas a favor de la entidad.

No se concibe la cooperativa de trabajo como una sociedad cerrada que instituya privilegios o reconozca discriminación de cualquier tipo en beneficio de alguno de sus integrantes, sino que debe ser una sociedad abierta; no se la considera, tampoco, una institución guiada por un primordial espíritu de lucro, consagrada a la acumulación de capitales e intereses o gobernada por núcleos excluyentes, al modo de una empresa comercial que utiliza sin restricciones el trabajo de los individuos, insertándolos como colaboradores subordinados a las órdenes de un superior (CSJN sent. del 24/11/2009 “Lago Castro, Andres Manuel c/Cooperativa Nueva Salvia Ltda. y otros” Fallos 332:2614).

Es por ello que se entiende que, en una cooperativa de trabajo genuina la calidad de socio excluye la de trabajador dependiente, lo que determinaría la inaplicabilidad de las previsiones de la ley de contrato de trabajo, en especial el art. 27 de la LCT y que lo contrario sucede cuando se detecta una entidad que, formalmente inscripta como cooperativa, no cumple con los postulados institucionales que justifican su creación, no pudiendo ignorarse que, en la práctica, las citadas cooperativas resultan entes permeables a situaciones de fraude laboral y con frecuencia se enmascaran bajo su estructura societaria, típicas prestaciones de carácter dependiente.

De modo que si la cooperativa de trabajo actúa como simple proveedora de mano de obra en beneficio de terceros resulta alcanzada por la legislación laboral y ello explica que, en su oportunidad, el Poder Ejecutivo haya sancionado el decreto 2.015/94 cuyas directivas vedan la posibilidad de que las cooperativas de trabajo, para el cumplimiento de su objeto social, provean la contratación de los servicios cooperativos por terceras personas utilizando la fuerza de trabajo de sus asociados.

Desde luego, la proyección y aplicación de las previsiones del art. 14 de la LCT –denuncia de fraude laboral- pueden servir para descorrer el velo corporativo y lograr la tipificación de las relaciones de los asociados a una cooperativa bajo el marco del derecho laboral y, a tal fin, el art. 40 de la ley 25.877 faculta a la inspección del trabajo a ejercer su contralor, a fin de verificar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social.





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

### Sentencia Definitiva

Paralelamente les veda actuar como empresas de provisión de servicios eventuales y de temporada y brindar, de cualquier modo, los servicios propios de las agencias de colocación.

En resumen, se configura un fraude cuando la cooperativa actúa en el mercado en la provisión de servicios eventuales o como mera intermediaria en la contratación de mano de obras, actividades que se les ha vedado desarrollar, pero ello no impide la posibilidad de que una cooperativa actúe en el mercado de trabajo prestando servicios a terceras empresas y esta es la situación que debe determinarse en autos.

Lo expuesto, sin perjuicio de aclarar que ciertos indicios pueden servir para concluir que la entidad cooperativa es fraudulenta, tales como: a) falta de documentación que acredite la existencia de contrataciones realizadas por la cooperativa con terceros clientes; b) un elevado número de socios trabajando en una empresa usuaria que cuenta con escasos trabajadores propios; c) la utilización de la modalidad cooperativa como banco de prueba para incorporar como efectivos a los más idóneos; d) la falta de convocatoria a las asambleas de asociados; e) que las remuneraciones de los consejeros, síndicos y asesores resulten desproporcionadas con relación a las sumas percibidas por los socios (conf. Ramírez, “Los sindicatos y las cooperativas de trabajo fraudulentas”, DT 2004-B-1449) y todos éstos indicios pueden surgir de prueba pericial, informativa e incluso de la testimonial que resulte de un hábil interrogatorio de la autoridad pública.

En virtud de lo anterior, bajo las precisiones reseñadas, es que adhiero a la propuesta de mi colega de Sala. Así lo voto.

### **LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:**

Adhiero a lo expresado por el Dr. Walter F. Carnota.

En mérito de lo que resulta del presente acuerdo, el Tribunal **RESUELVE** : 1) Revocar la resolución recurrida y ordenar al organismo a que lleve a cabo nuevamente un procedimiento respetando el debido proceso adjetivo en base a los argumentos esgrimidos precedentemente, 2) Imponer



las costas en el orden causado (conf. art. 68 2do párrafo del CPCCN.), 3)  
Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

NORA CARMEN DORADO  
Juez de Cámara

WALTER FABIAN CARNOTA  
Juez de Cámara Subrogante

JUAN FANTINI ALBARENQUE  
Juez de Cámara

ANTE MÍ: SÁNCHEZ MOSCOSO JOSE MARIA  
Prosecretario de Cámara

JSM

